Alberto Carrizosa Gelzis, Felipe Carrizosa Gelzis y Enrique Carrizosa Gelzis c. República de Colombia, Arbitraje CNUDMI, Laudo, 7 de mayo de 2021: el tribunal desestimó el reclamo de los demandantes al determinar que su nacionalidad efectiva y dominante en el momento relevante era la colombiana.

En su [laudo del 7 de mayo de 2021](#), el tribunal arbitral compuesto por John Beechey (presidente), Franco Ferrari (árbitro nominado por la demandante), y Christer Söderlund (árbitro nominado por Colombia) desestimó el reclamo de los demandantes en este caso relacionado con la inversión indirecta de la familia Carrizosa en Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda (“Granahorrar”), una institución financiera. El reclamo fue iniciado bajo el Capítulo de Servicios Financieros del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos.

Los demandantes tenían una participación accionaria indirecta en Granahorrar. De 1997 a 2001, Colombia experimentó una severa crisis financiera, lo que llevó al Gobierno a intervenir en el sector financiero a través del Banco Central, la Superintendencia (que supervisaba los niveles de liquidez de las instituciones financieras) y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (“Fogafín”), un fondo de garantía encargada de proteger los ahorros de los ciudadanos depositados en instituciones financieras. Los demandantes reclamaban por las medidas adoptadas en 1998 y años siguientes por Colombia y sus autoridades supervisoras bancarias en el marco del fallido rescate de Granahorrar.

La familia Carrizosa impugnó las medidas adoptadas ante los tribunales de Colombia. En 2007, el Consejo de Estado determinó que Fogafín y la Superintendencia no tenían pruebas suficientes de la insolvencia de Granahorrar y que las medidas administrativas no habían sido notificadas correctamente a la familia Carrizosa, y ordenó el pago de más de 114 millones de dólares en compensación a la familia. Las agencias recurrieron dicha decisión ante la Corte Constitucional, que en 2011 anuló la decisión del Consejo de Estado, sobre la base de errores de fondo, de procedimiento y de hecho contenidos en dicha sentencia. La familia Carrizosa solicitó la anulación de dicha decisión, al argumentar que la Corte Constitucional se había extralimitado en sus facultades al analizar la decisión del Consejo de Estado. En 2014, la Corte Constitucional emitió una orden desestimando la solicitud de anulación. Los demandantes presentaron un reclamo por expropiación directa.

Las partes acordaron bifurcar el procedimiento, por lo que el tribunal solo analizó la cuestión jurisdiccional. Colombia interpuso cuatro excepciones a la jurisdicción: i) *ratione temporis*, ya que los hechos que dieron lugar al reclamo habían ocurrido con anterioridad a la entrada en vigor del tratado, ii) *ratione voluntatis*, ya que los reclamos no eran arbitrables en virtud del tratado, iii) *ratione personae*, ya que el tribunal no tenía jurisdicción sobre los demandantes debido a que su “nacionalidad dominante y efectiva” era la colombiana; y iv) *ratione materiae*, debido a que los demandantes no habían realizado ninguna inversión protegida por el tratado. El tribunal aceptó la objeción *ratione personae*, por lo que no analizó las restantes.

Si bien las personas con doble nacionalidad, como los hermanos Carrizosa, no tienen prohibido presentar reclamos en virtud del tratado, dicho instrumento establece que las personas con doble nacionalidad califican como inversores extranjeros solo si su nacionalidad “dominante y efectiva” es la del Estado que no es parte en el procedimiento al momento: (i) del presunto incumplimiento; y (ii) cuando se interponga el arbitraje. El tribunal explicó que al determinar

cuál de las nacionalidades de los demandantes era la “preponderante” en el momento relevante, debía considerar “todos los factores pertinentes particulares del caso que se examina”.

El tribunal señaló que las opiniones y sentimientos subjetivos de los demandantes no deberían prevalecer sobre “la evidencia objetiva de sus vínculos con un Estado y no con otro”. Asimismo, sostuvo que, aunque la investigación debía centrarse en la situación al momento de la supuesta violación de las obligaciones contenidas en el tratado, la vida entera de los demandantes seguía siendo relevante, y esto debía resultar en un “enfoque holístico [...], aunque con el énfasis necesario en el período de las fechas críticas”.

El tribunal determinó que, tanto al momento de la supuesta violación del tratado como cuando se interpuso el procedimiento según las reglas de la CNUDMI, los demandantes eran predominantemente colombianos y, como tales, no calificaban como inversores extranjeros en virtud del Tratado. Los tres hermanos habían nacido y vivido en Bogotá. En sus declaraciones testimoniales habían explicado que habían regresado a Colombia para hacerse cargo de los múltiples negocios familiares que su padre había iniciado en el país. Aunque los hermanos también tenían una serie de intereses y activos en Estados Unidos, el tribunal señaló que las empresas familiares en Colombia constituían una gran parte de su patrimonio neto, y que Colombia era el centro de la vida familiar y social de los demandantes, ya que sus parejas, cónyuges, hijos y familiares residen o han residido en Colombia. Los demandantes también recibieron salarios, pagaron impuestos y poseían propiedades en Colombia. Además, habían votado en las últimas elecciones. Solo utilizaban su pasaporte estadounidense para viajar al exterior, pero el tribunal no le dio mucho peso a ese aspecto, al señalar la “relativa facilidad de movimiento y acceso que se adjunta a un pasaporte estadounidense en comparación con un pasaporte colombiano”.

Por ende, debido a que el tribunal determinó que la nacionalidad dominante y efectiva de los demandantes al momento relevante era la colombiana, su reclamo fue desestimado.